

Parte I  
*Política y gobernabilidad*

---



*Alberto Adrianzén M.  
Eduardo Ballón E.  
Oswaldo de Rivero  
Francisco Durand  
Paula Muñoz  
Fernando Tuesta Soldevilla  
Óscar Vidarte A.*



## Atrapados en la telaraña

*Eduardo Ballón E.*

## **Sumilla**

El Perú llega al tercer año del gobierno que eligiera en junio del 2016 en un escenario en el que la descomposición de su sistema político lo amenaza. Vivimos una crisis de larga duración que no estamos discutiendo ni política ni académicamente. La misma no es resultado de la vacancia presidencial o de los intentos recurrentes de la mayoría parlamentaria por asaltar distintas instituciones como el Ministerio Público o el Tribunal Constitucional, sino de la falta total de representación política, que es evidente. Esta carencia, contra lo que parecen creer nuestros representantes y muchos especialistas, no se limita al sistema electoral y habla de nuestra precariedad en tanto sociedad organizada y vigilante, capaz de construir partidos políticos que recojan las necesidades y demandas de los sectores que pretenden representar, así como generar los mecanismos institucionales de pesos y contrapesos del poder.

Más allá de sus buenas intenciones y su voluntad, el actual presidente está fuertemente condicionado por una larga continuidad neoliberal, con muchos indicios que señalan que acepta su condición de rehén, en un escenario donde otros toman las decisiones políticas más importantes. Un gobierno débil, sin fuerza propia, sin vínculos significativos con la sociedad, que parece tener como objetivo central llegar al 2021, no parece capaz de atender una crisis que parece llevarnos al «derrumbe», porque los actores mayoritarios están preocupados en su propia salvación, pero también porque el descrédito de la política y los políticos puede ser irreversible.

EL PERÚ LLEGA AL TERCER AÑO DEL GOBIERNO que eligiera en junio del 2016 en un escenario en el que la descomposición de su sistema político lo amenaza. Vivimos una crisis de larga duración que no estamos discutiendo ni política ni académicamente. Esta no es resultado de la vacancia presidencial o de los intentos recurrentes de la mayoría parlamentaria por asaltar distintas instituciones como el Ministerio Público o el Tribunal Constitucional, sino de la falta total de representación política, que es evidente. Dicha carencia, contra lo que parecen creer nuestros representantes y muchos especialistas, no se limita al sistema electoral y habla de nuestra precariedad en tanto sociedad organizada y vigilante, capaz de construir partidos políticos que recojan las necesidades y demandas de los sectores que pretenden representar, así como generar los mecanismos institucionales de pesos y contrapesos del poder. No es casualidad que, según el último informe del Latinobarómetro<sup>1</sup>, el apoyo a la democracia en el Perú cayera a 45% (ocho puntos menos) el último año, ocupando el antepenúltimo lugar en satisfacción con ella (16%), superando apenas a El Salvador y Brasil.

La renuncia a la presidencia de la República de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en marzo pasado fue apenas un capítulo de una

---

<sup>1</sup> Corporación Latinobarómetro. *Informe 2017*. Buenos Aires: Corporación Latinobarómetro, 2018. Ver en: [goo.gl/XCP8g2](http://goo.gl/XCP8g2)

historia que está lejos de terminar. El mandatario presentó su renuncia tras «salvar» un primer intento de vacancia promovido por el fujimorismo en diciembre del 2017, arrastrado por la multiplicación de los indicios de su vinculación con la empresa brasileña Odebrecht, a la que habría favorecido desde sus distintas posiciones de poder desde el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006). En ese contexto, el indulto concedido a Alberto Fujimori a cambio de los votos de varios de los entonces integrantes de Fuerza Popular, terminó liquidándolo ante la «aparición» de distintas grabaciones que evidenciaron, una vez más, las oscuras negociaciones entre el Ejecutivo y diversos congresistas del partido naranja para eludir el segundo intento por retirarlo del cargo.

### **El fin de un gobierno sin pena ni gloria**

La gestión de Kuczynski terminó sin pena ni gloria. La economía creció el 2017 apenas 2.5%, cifra por debajo de la proyección inicial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Su gobierno, que optó por la profundización del modelo en curso, no reconoció que el factor más importante en la caída de la inversión privada y el crecimiento económico estaba asociada al alto precio de los *commodities*, abandonando el pálido esfuerzo de diversificación productiva iniciado por el gobierno anterior. A lo largo de ese año, el MEF mantuvo su apuesta central por el «destrabe» de los grandes proyectos, descuidando la gestión y la inversión pública, que se incrementó en 7.1% después de tres años de caída continua, a pesar de que solo se ejecutó el 70.1% de los recursos contemplados para proyectos. Por el lado de la inversión privada, esta creció en apenas 0.3%.

Las distintas modificaciones tributarias que buscaban ampliar la base de contribuyentes antes que modificar las tasas impositivas, en particular el régimen MYPE tributario, fracasaron en su intento. No sorprendió, entonces, ni el descenso de la recaudación tributaria

(-1.3%) ni la disminución de los ingresos tributarios, los cuales representaron el 13.4% del PBI, uno de los más bajos de la región<sup>2</sup>. En este contexto, los generosos sistemas de tributación y devolución de impuestos aplicables a la minería crecieron explosivamente desde 2400 millones de soles, el 2014, hasta seis mil millones de soles anuales, los años 2016 y 2017; los ingresos fiscales netos de la minería (tributos menos devoluciones) también cayeron, pasando de cinco mil millones de soles, el 2010, hasta 845 millones de soles, el 2017<sup>3</sup>, a pesar de que el precio real de los minerales, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), fue el mismo para ambos años.

En este escenario, la economía urbana estuvo virtualmente paralizada. El empleo urbano formal (empresas de diez y más trabajadores) cayó continuamente durante todo el segundo semestre del 2017 y los dos primeros meses de este año. Los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a nivel nacional evidencian que el 2017 se perdieron cerca de 160 000 empleos (3.5%). El retroceso de la demanda vino acompañado por una disminución de 4.7% de los precios promedio de la agricultura en los mercados mayoristas, empobreciendo aún más a los agricultores y alentando las protestas de maiceros, paperos y arroceros que se sucedieron en los últimos meses del gobierno de PPK<sup>4</sup>. No fue sorpresa, en consecuencia, el que la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) registrara el incremento de la pobreza en un punto, alcanzando al 21.7% de la población, 375 000 personas que dejaron de ubicarse en la clase media, observándose que el deterioro fue mayor en Lima, donde la pobreza llegó al 13.3%.

El naufragio de la «reconstrucción con cambios» fue evidente a un año del fenómeno El Niño: los avances a fines del 2017 –que

---

<sup>2</sup> Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). *Reporte de inflación: Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2018-2019*. Lima: BCRP, 2018.

<sup>3</sup> De Echave, José y Flores, César. «¿Qué hacer frente a las devoluciones tributarias?». *cooperacion.org.pe*, Lima, 11 de abril del 2018. Ver en: [goo.gl/scXxUd](http://goo.gl/scXxUd)

<sup>4</sup> Francke, Pedro. «¿Nuevos rumbos? No parece». *Hildebrandt en sus Trece*, Lima, 13 de abril del 2018.

no pasaban de una veintena de proyectos en ejecución– decían del fracaso de un modelo de intervención. Con la economía claramente desacelerada, jaqueado por las acusaciones de corrupción que se multiplicaban, golpeado cotidianamente por el fujimorismo en el Congreso, el gobierno de PPK «suicidó» al gabinete de Fernando Zavala buscando recomponer sus relaciones de subordinación al fujimorismo con uno nuevo encabezado por Mercedes Aráoz. Penúltimo y también inútil intento que se buscó prolongar con el calculado y grosero indulto a Fujimori. Casi de inmediato lo abandonaron tres de sus congresistas y por lo menos dos ministros. La caída del apoyo al indulto «humanitario» se hizo clara: la desaprobación pasó del 38% (en octubre del 2017) al 49% (en enero del 2018)<sup>5</sup>. En ese contexto, las movilizaciones de la calle contra la medida se sucedieron. El 78% de la población estaba convencida de que el indulto resultó de una negociación política, mientras la Sala Penal debía pronunciarse sobre el caso Pativilca y el derecho de gracia concedido. En otras palabras, un tema abierto y desfavorable al mandatario.

A fines de diciembre su soledad fue evidente. Los malestares de la gente, afectada por un país sin norte, con miles de colegios en mal estado, los medicamentos y distintas tarifas públicas subiendo sistemáticamente, los servicios de salud colapsando, la delincuencia desbordada y los abusos de muchas grandes empresas, aunque sin conexión clara con la disputa política y muy fragmentadas, se expresaban en las calles –591 protestas colectivas entre julio y diciembre, 53 heridos y cinco muertos en ese período<sup>6</sup>–, prolongándose hasta los últimos días de la gestión; las demandas de los paperos, torpemente gestionadas por el Ejecutivo, se les escaparon de las manos: tres muertos en Huánuco y Huancavelica, y una radicalización creciente de las distintas agrupaciones

---

<sup>5</sup> Ipsos Apoyo. Opinión Data del mes correspondiente.

<sup>6</sup> Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad. *Reporte de Conflictos Sociales N.º 166*. Lima: Defensoría del Pueblo, 2018. Ver en: [goo.gl/GbieC6](http://goo.gl/GbieC6)

de productores que impulsaron un paro agrario, ratificaron la incapacidad del gobierno para lidiar con las demandas sociales y pusieron en la picota a su ministro de Agricultura, mientras se anunciaban paralizaciones de los médicos y los maestros.

La renuncia de PPK fue recibida con alivio por la opinión pública. La salida constitucional dejaba satisfechos a tirios y troyanos. No obstante el ruido político, la economía no se vio significativamente afectada y los diversos sectores empresariales, fuertemente afectados por distintas denuncias que involucraron a algunos de sus buques insignia –Graña y Montero, Gloria, el «club de los constructores»–, pero además judicialmente ya comprometidos varios de ellos con el caso Lava Jato, tras aplaudir discretamente el indulto, también presionaron por la salida de PPK. El fujimorismo keikista estaba satisfecho, porque además encontró el camino para resolver las disputas familiares y avanzar en la liquidación de Kenji Fujimori, mientras muchos de los otros sectores esperaban encontrar mejores condiciones para enfrentar la arremetida autoritaria y conservadora en la que la mayoría parlamentaria se embarcó desde el inicio de la gestión del exmandatario.

## **La continuidad de un nuevo gobierno condicionado y rehén. Economía y conflictividad**

A diferencia de la sucesión del año 2000, tras la fuga de Fujimori, Martín Vizcarra asumió la presidencia en un contexto menos traumático y con una estabilidad macroeconómica de mayor fortaleza relativa, aunque estructuralmente condicionado por una larga continuidad neoliberal y la desregulación a expensas del Estado, la política y la sociedad, como eje de la dinámica nacional<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Mariani, Santiago. «Continuidad neoliberal en el Perú». *otramirada.pe*, Lima, 5 de junio del 2018. Ver en: [goo.gl/Deohyj](http://goo.gl/Deohyj)

Desde un primer momento, y básicamente a través de gestos, Vizcarra buscó marcar diferencias de «estilo», afirmando su condición de ingeniero provinciano, una disposición dialogante y una mayor cercanía con la gente y sus necesidades, estableciendo prioridades generales para su gobierno, con las que resulta muy difícil estar en desacuerdo, como apostar por la educación y la salud como bases para el desarrollo, luchar contra la corrupción o asegurar la presencia efectiva del Estado en todos los territorios del país.

Con la instalación de su gabinete, varias cosas empezaron a aclararse sobre su naturaleza y viabilidad. Un equipo ministerial débil y contradictorio, con un perfil predominantemente técnico, de «segunda» línea, y con algunos ministros con cierta experiencia en la gestión pública, su composición parecía buscar «contentar» a distintos sectores políticos, hayan tenido o no capacidad de veto. Sorprendió especialmente la presencia de personajes innegablemente polémicos como Salvador Heresi, en la cartera de Justicia, mientras que la designación de David Tuesta en el MEF evidenció el peso en la sombra de Luis Carranza, que seguramente lo apadrinó, garantizando la continuidad de las líneas maestras del modelo.

Como no podía ser de otra manera, no obstante la tranquilidad con la que la opinión pública recibió al nuevo equipo de gobierno, las críticas se dispararon en todas las direcciones. El premier, que negó varias veces su interés en ese cargo, y el nuevo ministro de Justicia fueron los blancos iniciales, rápidamente acompañados por varios otros, hablándose pronto de un cogobierno con el fujimorismo y hasta con la izquierda. Quedó claro así, desde el primer día, que la supuesta luna de miel del presidente y el primer ministro, ambos provincianos, era de baja intensidad y que el gobierno —que no olvidemos no por nuevo dejaba de ser continuidad— nacía marcado por la precariedad: sin fuerza política propia, con limitadas conexiones en la estructura del Estado y la burocracia, sin relaciones directas con los empresarios y con un Congreso de

la República donde el fujimorismo se recuperaba rápidamente de su «hipo» de debilidad.

Es decir, una fuga a un futuro incierto, más allá de las buenas intenciones de los discursos inaugurales del nuevo mandatario. La impericia gubernamental se evidenció pronto: Tuesta advirtió de la reedición de la política de Alfredo Thorne y anunció un inminente recorte del gasto fiscal, se produjo una innecesaria y desmedida intervención policial contra los estudiantes de San Marcos, el presidente imprudentemente se reunió con el tristemente célebre Oscar Medelius, Daniel Córdova tuvo que renunciar al ministerio de Producción y la reconstrucción siguió atrapada en su laberinto, dándoles la razón a quienes con argumentos relativamente fundados expresaban su poco entusiasmo por los primeros pasos del nuevo gobierno. Tantos errores «aplastaron» los pocos gestos políticamente «correctos»: la disposición a respetar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el indulto a Fujimori, la negociación del conflicto de la pesca artesanal, el sistema nacional anticorrupción y la insistencia en la aprobación de la ley del octágono para los alimentos.

La necesidad de incrementar la recaudación para enfrentar el déficit fiscal generó los primeros desencuentros entre la sociedad y el nuevo gobierno, así como dentro de él. La pretensión de Tuesta de ampliar la base tributaria bajando el mínimo inafecto fue el inicio; el incremento selectivo de impuestos al consumo, en particular el que afecta al precio de los combustibles, el detonante. La decisión, que una vez más protege los millonarios beneficios tributarios (recordemos que el jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria –Sunat– informó en el Congreso, en abril pasado<sup>8</sup>, que estos le restan al país, este año, 16 498 millones de soles, 2.19% del Producto Bruto Interno –PBI– nacional, 48.7% de los cuales son de exoneraciones) favorece al

---

<sup>8</sup> «Exoneraciones tributarias costarán S/8.034 millones en 2018». *El Comercio*, Lima, 18 de abril del 2018. Ver en: [goo.gl/q3qiHM](http://goo.gl/q3qiHM)

gran capital agroexportador, financiero, minero y a los centros educativos con fines de lucro, entre otros. Tuesta, que sabía lo que hacía, cobrar más a los que menos tienen (disfrazando su «paquetito» de color verde-salud), estaba haciendo política, cumpliendo con sus objetivos fiscales, importándole poco lo que pensarán el presidente y el premier<sup>9</sup>, terminó renunciando y siendo reemplazado por Carlos Oliva, un técnico que ya pasó antes por el MEF. Como no podía ser de otra manera, el nuevo ministro se apuró en asegurar que la minería se mantendrá como un sector fundamental para nuestra economía, anunciando perspectivas de inversión por más de 58 000 millones de dólares, es decir, más de lo mismo.

Si la continuidad viene desde la economía, también la encontramos en los silencios e indefiniciones del gobierno. Su incapacidad para, por lo menos, nombrar el enfoque de género, asediado grotescamente por el fujimorismo en acuerdo estrecho con los sectores más conservadores del país, solo es comparable con su cautela frente a la pretensión naranja de construir una nueva narrativa del conflicto interno y su rol, lo que requieren para reescribir la historia del país (alentados por el patético espectáculo del congresista Edwin Donayre para desprestigiar el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social –LUM–, y «disparar» una campaña en esa dirección), facilitando el camino neoconservador y autoritario de aquellos en su alianza con sectores militares, empresariales y distintos grupos católicos y evangélicos ultramontanos hacia el 2021. Pareciéramos estar pues frente a la aceptación del presidente de su condición de rehén, en un escenario donde otros toman las decisiones políticas más importantes.

---

<sup>9</sup> Campodónico, Humberto. «Más allá de la renuncia de Tuesta». *La República*, Lima, 6 de junio del 2018. Ver en: [goo.gl/jvoPwA](https://goo.gl/jvoPwA)

## ¿Un gobierno contra las cuerdas?

Así las cosas, una última encuesta<sup>10</sup> muestra que la aprobación presidencial llega apenas a 29%, cayendo 18 puntos en un mes, mientras su desaprobación asciende a 56%, incrementándose 22 puntos. Los números del primer ministro, como ocurrió desde el primer momento, son más duros: su aprobación desciende a 18%, disminuyendo 6 puntos, mientras la desaprobación llega a 63%, subiendo 9 puntos. No obstante esas cifras, 71% cree que el presidente está gobernando igual o mejor que PPK y 39% piensa que el premier lo está haciendo como esperaban o incluso mejor.... En otras palabras, es el desencanto de un público que en ningún momento tuvo expectativas muy altas frente a ambos, consolidándose la imagen de un gobierno débil, que estuvo siempre presente. Lo significativo es que el mandatario cae 15 puntos en la valoración de los encuestados sobre su preocupación por las provincias, desciende además 12 puntos en la percepción de su cercanía con el pueblo y apenas 10% cree que la descentralización está siendo afrontada bien o muy bien, evidenciando que el gobierno, terminada la participación mundialista del Perú, empieza a perder parte del capital simbólico que apareció como su mayor fuerza para enfrentar la precariedad de su nacimiento.

Sin embargo, para su tranquilidad relativa, la situación de los principales actores de la escena oficial no es sustantivamente mejor. La aprobación del Congreso continúa cuesta abajo, 12%, mientras su desaprobación sube en ascensor, 83%. Su presidente, empeñado ahora en impulsar un parque temático como parte de la reescritura fujimorista de la historia de la violencia interna reciente, tiene apenas 13% de aprobación. Al Ministerio Público y al Poder Judicial no les va mejor, mientras todos los principales líderes políticos, desde el silencioso Julio Guzmán hasta Marco Arana y Gregorio

---

<sup>10</sup> GfK. *GfK Opinión junio 2018. Encuesta urbano y rural*. Lima: GfK, 2018. Ver en: [goo.gl/HEaXtS](http://goo.gl/HEaXtS)

Santos, descienden varios puntos en su valoración, Keiko incluida, como parte del descrédito de la política. No sorprende entonces el ánimo de un importante sector que exige se cierre el Congreso, evidenciando su descontento, reforzado con las denuncias por gastos superfluos en pleno período de austeridad establecido por el Ejecutivo, que se suma al autoritarismo y arbitrariedad de la mayoría parlamentaria, expresada recientemente, entre otras cosas, en la resistencia a la supervisión de las cooperativas, la denominada «ley mordaza», el rol del responsable de seguridad del Congreso y la proliferación de funcionarios de ese poder que «trabajan» atacando en las redes sociales a los críticos del partido naranja.

En la misma dirección, los vientos de la economía mundial, aunque de patas cortas por la inestabilidad del factor Donald Trump (por la inminencia de una guerra comercial que enfrenta a Estados Unidos con China y la Unión Europea, así como por las decisiones de su Reserva Federal), favorecen al gobierno en el corto plazo. Previsiblemente llegaremos a fin de año con un crecimiento cercano al 4%, la balanza comercial muestra un superávit de más de 2650 millones de dólares en los primeros cinco meses del año y en los últimos 12 meses superó los 7000 millones, la cifra más alta en los últimos 70 meses, situación ésta que puede prolongarse al 2019. Ciertamente, sin embargo, que nuestro peligro mayor, la recesión de la economía urbana y la pérdida de empleos formales, solo puede ser enfrentado con una mezcla de políticas fiscales y monetarias expansivas, para las que contamos con los recursos financieros, pero que no son parte del credo neoliberal imperante<sup>11</sup>.

Desde la sociedad, el paro de los transportistas y las movilizaciones en el sur contra el alza de los combustibles fueron el primer amago de respuesta nacional que hizo retroceder, por lo menos parcialmente, las medidas del gobierno. Sin embargo, otros sectores todavía esperan: los maestros ligados a Pedro Castillo, no obstante

---

<sup>11</sup> Dancourt, Oscar. «Vizcarra y la reactivación de la economía». *otramirada.pe*, Lima, 17 de abril del 2018. Ver en: [goo.gl/Q2yWLW](http://goo.gl/Q2yWLW)

el mal manejo del conflicto por el Ejecutivo, fracasaron en su intento de paralizar la educación; los agricultores demandan atención a la problemática de los productores de papa y maíz; los gremios del sector Salud y del Poder Judicial presionan por sus remuneraciones; las demandas de la reconstrucción y de servicios básicos siguen pendientes, al igual que los casos por contaminación e incumplimiento de compromisos por parte de las industrias extractivas; todos ellos son parte de un paquete pendiente que el gobierno tiene que empezar a atender, a pesar de la impericia que muestra en la gestión de la conflictividad. Desde la movilización social, sin embargo, el panorama todavía da chance al gobierno, porque su alta dispersión y fragmentación la muestran lejos de articular sus distintas luchas y, más aún, de significar una propuesta política.

De esta manera, todo indica que el capital mayor del Ejecutivo radica en su clara decisión de «durar» hasta el 2021 y en las debilidades de las principales fuerzas políticas del país, estas interesadas antes en reordenarse para enfrentar los comicios de ese año con posibilidad de éxito electoral, en vez de hacerse cargo de un país con signos crecientes de agotamiento y descomposición.

## **¿Y el fujimorismo?**

A estas alturas, el fujimorismo, la principal fuerza política del país, se debate en sus propios dilemas. Si bien han recuperado el control del Congreso de la República y han logrado controlar parcialmente sus disputas internas con la virtual derrota de Kenji, avanzando significativamente en su intención de allanar su camino al 2021 –control relativo del Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura, sectores del Ministerio Público, el Poder Judicial y, a través de ellos, de las entidades electorales–, el precio parece alto e incierto. Las últimas encuestas evidencian una caída significativa en la aprobación y en la intención de voto por Keiko, las cifras de rechazo continúan ascendiendo y sus dificultades organizativas

se evidencian de cara a las próximas elecciones de octubre donde solo participarán directamente en 613 jurisdicciones regionales y municipales de las 1800 en juego, superados largamente por APP, AP y Somos Perú<sup>12</sup>.

Aunque seguramente decidirán el futuro de la próxima mesa directiva del Congreso, donde presumiblemente ampliarán su mayoría con los congresistas que continúan «ganando» (Vilcatoma, Donayre, Castro, Olaechea), así como con el respaldo eventual de sectores de APP y del APRA, seguirán sumando investigaciones contra algunas de sus figuras (Vergara, Mamani) y continuarán con las agendas particulares de sus congresistas y de grupos particulares con severos cuestionamientos, asegurando el blindaje a varios de sus miembros, incluyendo naturalmente a Keiko Fujimori, especialmente de cualquier cargo de corrupción. Están obligados a hacerlo por la naturaleza misma de una bancada tan numerosa con menos de 20 militantes que construye su cohesión a partir de acatar las decisiones de su presidenta, quien les otorga la seguridad de la bancada.

Sería, empero, un error grave imaginar que la situación actual debilita definitivamente las posibilidades del fujimorismo hacia el 2021. Es claro que Keiko ganó el conflicto interno y continuará usando su mayoría parlamentaria para terminar de articular el escenario institucional y mediático que requiere para esos comicios. También es evidente que está construyendo una alianza conservadora bastante poderosa, fortalecida por los vientos que soplan en el mundo, a la que va sumando nuevos sectores (11 de sus congresistas pertenecen a las iglesias evangélicas más ultramontanas). Más importante aún, Fuerza Popular representa efectivamente a sectores importantes que comparten sus valores y su manera de actuar. Finalmente, su voluntad de poder parece sin límites, llevándola a sacar clara ventaja de las otras fuerzas,

---

<sup>12</sup> Tanaka, Martín. «Carreras políticas sin partidos». *La República*, Lima, 1 de julio del 2018. Ver en: [goo.gl/uTjEjk](http://goo.gl/uTjEjk)

atrapadas estas en sus propias vacilaciones y disputas internas que apelan a sectores ciudadanos con los que no mantienen relación, los que se sienten desvinculados de una clase política que no los representa.

## ¿Próximos al derrumbe institucional?

Distintas mediciones, como se observa en el siguiente cuadro, evidencian el crecimiento sostenido de la percepción de la corrupción como el principal problema del país, superado solo por la suma de la delincuencia y la inseguridad ciudadana.

**Cuadro n° 1**  
**Percepción de los principales problemas del país**

Prioridad del problema	Semestre móvil		Variación de puntos porcentuales
	Noviembre 2016 - Abril 2017	Noviembre 2017 - Abril 2018	
Corrupción	48.3	53.1	4.8
Delincuencia	44.7	41.6	-3.1
Pobreza	19.9	19.8	-0.1
Falta de seguridad ciudadana	18.7	15.5	-3.2
Falta de empleo	13.7	13.5	-0.2
Mala calidad de educación estatal	12.0	10.5	-1.5

Nota: Pregunta con alternativas de respuesta múltiple.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Encuesta Nacional de Hogares. Módulo Gobernabilidad, Transparencia y Democracia.

La misma, como es obvio, está acompañada por la sistemática pérdida de confianza en las principales instituciones del país, especialmente de aquellas directamente ligadas a la política y a la representación (partidos políticos, Congreso, gobiernos regionales y municipales), ninguna de ellas con más de 14%.

**Cuadro n° 2**  
**Confianza en las principales instituciones**

Institución	Noviembre 2016 - Abril 2017	Noviembre 2017 -Abril 2018	Puntos porcentuales
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec)	57.5	55.1	-2.4
Iglesia católica	51.3	48.8	-2.6
Ministerio de Educación	41.6	38.1	-3.4
Fuerzas Armadas	32.2	30.7	-1.4
Radio y televisión	28.9	25.0	-3.9
Defensoría del Pueblo	24.3	22.1	-2.3
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)	22.1	20.3	-1.8
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat)	23.5	19.9	-3.6
Policía Nacional del Perú	19.2	18.9	-0.3
Jurado Nacional de Elecciones (JNE)	18.5	16.3	-2.2
Prensa escrita	19.1	16.0	-3.0
Municipalidad distrital	17.1	14.4	-2.7
Ministerio Público - Fiscalía de la Nación	14.8	13.9	-1.0
Poder Judicial	13.3	13.1	-0.2
Municipalidad provincial	16.2	13.0	-3.3
Contraloría General de la República	14.1	12.5	-1.6
Procuraduría anticorrupción	12.9	11.9	-1.0
Comisión de Alto nivel Anticorrupcion	12.4	11.4	-1.0
Gobierno regional	12.2	10.1	-2.2
Congreso de la República	8.2	6.3	-1.9
Partidos politicos	4.3	4.4	0.2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Encuesta Nacional de Hogares. Módulo Gobernabilidad, Transparencia y Democracia.

Y si bien esta se trata de una situación que viene desde atrás, y de la que no se puede responsabilizar a los gobernantes actuales, no podemos seguir pretendiendo que la democracia se vive y goza porque hay elecciones libres cada cierto tiempo. Estamos ante una realidad que ha «superado» la teoría y debe ser cuestionada desde todos los ámbitos sociales. La ficción democrática por fin se está revelando y el fracaso de la transición liderada por el republicano Valentín Paniagua resulta apenas un dato del momento actual.

En las últimas semanas, los indicios en esa dirección se han multiplicado. *Ad portas* de las elecciones descentralizadas, el 70% de encuestados por GfK en junio cree que su alcalde es corrupto, 49% no está interesado en informarse de los candidatos y 52% no está motivado para votar. La cantidad de aspirantes sentenciados y acusados es indignante, como lo es más la situación que atraviesa la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), penetrada por varios funcionarios «reciclados» de los años más oscuros del fujimontesinismo. El Ministerio Público, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, penetrados por las mismas fuerzas, ventilan sus disputas internas que tienen como telón de fondo el caso Lava Jato y las decisiones vinculadas a la corrupción de la que forman parte, tal como lo evidencian las grabaciones recientes. Sus miembros devienen en *vedettes* mediáticas y tratan de convencernos de sus argumentos «legales» y de su vocación anticorrupción para esconder las peleas por el poder de estas instituciones, que son las que tienen entre sus manos la capacidad más cercana de avanzar, distraer o cerrar las investigaciones que asustan a buena parte de nuestra clase política, pero también del mundo empresarial.

Así, cuando el sistema democrático se limita a un ejercicio electoral, peor aún con reglas como las que tenemos, los resultados producen vacíos que se manifiestan en formas de descontento e insatisfacción como las que observamos. En el mediano plazo –salvo que ocurran imprevistos de esos que nos caracterizan–, seguiremos moviéndonos en una crisis que parece caminar al

«derrumbe», porque los actores mayoritarios están preocupados en su propia salvación, pero también porque el descrédito de la política y de los políticos puede ser irreversible. Entre la corrupción que se evidencia sin control y la guerra de bandas -unas más grandes y fuertes, y otras pequeñas, pero con incidencia en un escenario precario-, donde se está por ver cómo se controla y a quiénes se liquida, el deterioro del régimen político seguramente continuará.